

Es copia que certifico. México, Diciembre trece de mil ochocientos setenta y uno.  
—Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.

## AMPARO.

*De garantías promovido por el C. Timoteo Fernández de Jauregui en su nombre y como apoderado de varios vecinos de Querétaro, ante el juzgado de Distrito de este Estado, contra el decreto núm. 22 de la legislatura del mismo, que les impone varias restricciones en la venta de maíz.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que el decreto núm. 22 de la legislatura del Estado establece un nuevo sistema en la compra y venta del maíz; por lo que temerosos de sus consecuencias y creyendo ver en él medidas restrictivas de la libertad de comercio otorgada por la Constitución, los interesados en la conservación de esa libertad han pedido la suspensión de un acto que viola las garantías individuales.

Si toda innovación es peligrosa y trae consigo una revolución en los intereses de la clase á quien afecta; mucho mas puede decirse esto de medidas envejecidas que se resucitan y que no por esto dejan de ser una novedad en nuestros tiempos.

En efecto, basta leer las leyes de los títulos 19 y 20 lib. 7<sup>o</sup> de la Novísima Recopilación, para conocer allí (sin sus ventajas) el sistema que se quiere poner en planta, con la notable diferencia que entonces habia, de que esas disposiciones se limitaban á conceder el derecho de tanto á los que expendían en las antiguas Alhondigas, y hacer las compras con el pósito propio de los pueblos. Así en la ley 19, del título 19 lib. 7 de la Novísima Recopilación encontramos estas palabras: "La declara-

ción y providencia que contiene el anterior capítulo, no ha de impedir la libre circulación de los granos para abastecer sin impedimento alguno».... Y sin embargo de esto eran los pósitos considerados como una carga para el labrador, como lo demuestra el preámbulo del decreto de las Cortes de 24 de Agosto de 1871, que dice: "Las cortes generales y extraordinarias, queriendo que los pósitos del reino, en el estado ruinoso y casi nulo en que se hallan, no continúen siendo una carga insoportable de las muchas que agobian al labrador...."

El decreto de 8 de Junio de 1813, art. 8.º manda que: "Así en las primeras ventas como en las ulteriores ningún fruto ni producción de la tierra, ni los ganados ni sus esquilmos, ni los productos de la casa y pesca ni las obras del trabajo y de la industria estarán sujetas á tasas ni posturas, sin embargo de cualesquiera leyes generales ó municipales. Todo se podrá vender y revender al precio y en la manera que mas acomode á sus dueños, con tal que no perjudiquen á la salud pública; y ninguna persona, corporación ni establecimiento tendrá privilegio de preferencia en las compras...." En el art. 9 continúa: "Quedará enteramente libre y expedito el tráfico y comercio interior de granos y demás producciones de unas á otras provincias de la monarquía y podrán dedicarse á él los CO. de todas clases, almacénar sus acopios donde y como mejor les parezca, y venderlos al precio que les acomode, sin necesidad de matricularse, ni de llevar libros, ni de recoger testimonios de las compras."

El Lic. D. Juan N. Rodríguez de San Miguel, cuya autoridad no puede ser sospechosa para los defensores del decreto de la legislatura, omitió en sus Pandectas Hispano Mexicanas las leyes de los títulos 19 y 20 lib. 7 de la Novísima Recopilación poniendo la siguiente "advertencia"

"Las materias comprendidas desde el título 12 del lib. VI hasta el título 9 del lib. 9 en la Novísima, á excepcion de los que

ya expresaré, son relativos á objetos absolutamente inútiles hoy aun para la misma España, por haber variado ya la legislación y las costumbres: lo son mucho mas para nosotros, supuesto nuestro sistema de gobierno, y supuesta nuestra particular legislación." (Tom. 2, pág. 253 ed. de 1840.)

Por esto sin duda ya no el moderno Diccionario de Legislacion de Guim, sino el antiguo de D. Joaquín Escriche en su tercera edicion que data desde el año de 1847 se explica en el art. "Granos," en los siguientes términos: "Largo seria tejer la historia de las vicisitudes y alternativas que entre nosotros ha sufrido el tráfico de granos: unas veces ha prevalecido la libertad, y otras la prohibicion ó las restricciones segun las opiniones de los que en cada tiempo tenían el poder, como es de observar por las 20 leyes y 18 notas contenidas en el tít. 19 lib. 7, Novísima Recopilacion y por varios decretos que posteriormente se han publicado. Supérfluo seria por otra parte ponderar las ventajas de la libertad, pues que despues de tantos escritos luminosos de los economistas y tantas lecciones de la experiencia está ya este punto fuera de combate y el tráfico sin trabas ha sido sancionado por las modernas leyes..."

Estas ideas se han considerado como un adelanto social, como una conquista de la civilizacion sobre el retroceso, y como una revindicacion de los derechos usurpados al hombre por el espíritu reglamentario y de sistema. No es extraño por lo mismo verlas consignadas en el art. 4º de la Constitucion, y puestas bajo de la salvaguardia de los tribunales de la federacion por los artículos 101 y 102 del referido pacto fundamental.

En vista de lo cual y de conformidad con lo prevenido en los artículos 5º y 6º de la ley de 20 de Enero de 1869, el promotor fiscal pide se sirva vd. dictar la suspension del acto reclamado.

Querétaro, Noviembre quince de mil ochocientos setenta y uno.—*Luis Castañeda.*

### *Otro pedimento del C. Promotor Fiscal.*

C. juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que la cuestion sometida al fallo de vd. se concreta á saber si el decreto núm. 22 de la legislatura de Querétaro, lastima algunos de los derechos del hombre consignados en la seccion 1ª tít. 1º de la Constitucion federal. Considerada en lo general la disposicion referida, es indudable que tiende al restablecimiento de los extinguidos Pósitos y Alhondigas; y no simplemente á señalar un local público para el expendio del maiz. Este es un punto de hecho que queda demostrado con la simple lectura del mismo decreto.

Para juzgar de su inconstitucionalidad, basta recordar que nuestro código fundamental está basado sobre las doctrinas económicas mas favorables á la libertad del comercio. Segun estas, la administracion pública nunca debe olvidar el saludable principio de ingerirse lo menos posible en las relaciones de los individuos entre sí. Los hombres se unen y asocian especialmente para asegurarse la posesion pacífica del fruto de sus trabajos. Este derecho no lo desconoce, ni puede desconocerlo ninguna autoridad; y es tan antiguo como la existencia misma del hombre, por lo que ha sido considerado como inviolable en nuestra carta constitucional. Los frutos de la agricultura son propiedad del individuo que los ha sembrado y cultivado: el derecho que un hombre tiene de adquirirlos de su primitivo dueño para venderlos despues á mayor precio es un acto de lícito comercio; por lo que imponerles condiciones es impedir su ejercicio garantizado por el art. 4 de la Constitucion. Sí obligar á un hombre á que compre y venda en un lugar determinado; á que deposite sus efectos en manos de personas extrañas; á que los almacene en bodegas públicas y á que les fije de antemano un precio que no puede au-

mentar, no es cohartarle la libre disposicion de esos mismos efectos y por consiguiente restringir el goce de lo propiedad: no se adivina á que actos quiera el ejecutivo de Querétaro llamar limitativos de ese derecho. Y todo esto está prescrito para los dueños y expendedores de maíz en esta plaza, por los artículos 4, 5, 6, 31, 32 y 33 del decreto de 25 de Octubre último.

Es cierto que el art. 4. solamente establece un administrador del mercado central responsable del maíz que voluntariamente se le entregue; pero tambien lo es, que el 32 considera como clandestina la venta que se haga fuera del mercado y sus sucursales; viniendo á ser mentida la espontaneidad de un acto que la ley castiga si no se ejecuta. El art. 31 prohíbe que se le suba de precio al maíz, que se deposite en los mercados; y el 6, bajo el nombre de obligaciones, da facultades al administrador para presenciar todas las ventas que se hagan en el mercado, evitando dar al medidor la semilla medida por el dueño, y que aquel reciba la venta; así como para vijilar que no haya ventas clandestinas. Estas ventas son castigadas con una multa de diez á cincuenta pesos por el art. 32. El 36 dice: "El resguardo de la aduana de esta ciudad, el de la municipalidad, los guarda cuarteles, los vijilantes de estos y los ayudantes de acera, perseguirán y aprehenderán el contrabando de este efecto." Tales son las medidas prohibitivas *que teniendo á la vista el escrito de los maiceros se propone el ejecutivo del Estado sostener victoriosamente*; y cree haberlo conseguido en su informe, en el que se leen las siguientes expresiones: "Pareceme haber cumplido lo que al principio dije: esto es, que contestaría victoriosamente los argumentos de los quejosos; pues en efecto, despues de lo hasta aquí expuesto, ningun entendimiento sano podría persistir en la opinion de que el decreto núm. 22 viola alguna de las garantías otorgadas por los artículos 4 y 28 de la Constitucion general." Y sin embargo de

ellas, se ha limitado á probar, quien las vierte, que en el citado decreto núm. 22 no se establece monopolio ni estanco de maíz: pero lo que no ha demostrado és, que no contenga la mencionada disposicion prohibiciones de las que habla el art. 28 de la Constitucion.

Si se examina lo que viene á sér el derecho de propiedad, no puede dudarse que se ataca por el referido decreto. Este derecho es, el que todo hombre tiene de gozar y disponer á su arbitrio del producto de su industria y trabajo, y de todos los demas bienes que posea ó pueda adquirir legítimamente. De aquí es, que no teniendo la sociedad mas accion sobre sus individuos que evitar se perjudiquen mutuamente, solo en el caso de suponerla dañosa podrá tener accion en la industria que es la mas sagrada é inviolable de todas las propiedades, por que es la fuerza originaria de todas las demás.

"Mil veces (dice un economista moderno) se ha considerado la libertad como un fin, y no es mas que un medio: el fin es la felicidad social. Si pues la libertad se halla tal vez en oposicion con el interés público, debe sufrir restricciones; pero como es evidente para los hombres ilustrados que un régimen libre es el único favorable á la industria, es preciso que la necesidad de las excepciones tenga un caracter de evidencia: por ejemplo; es evidente que no debe dejarse en absoluta libertad una profesion que consiste en preparar medicamentos y vender venenos. Aquellos que hayan de ejercerla deben á la sociedad una garantía de su probidad y de sus luces." (Economía política por J. Droz).

En el informe de D. Gaspar de Jovellanos, en el expediente de la ley agraria, se trataron las materias mas importantes de economía política adaptas á nuestra legislación. Por el se vé, que la derogacion de las leyes que imponen condiciones al ejercicio del comercio, de la industria y al aprovechamiento de la propiedad, era una

necesidad urgentemente reclamada en el pasado siglo. El que suscribe no puede dispensarse de copiar algunos párrafos de tan interesante obra, que ponen en relieve los errores económicos que se ha propuesto resucitar al decreto mencionado:

“223. Hasta aquí ha examinado la sociedad las leyes relativas á la propiedad de la tierra y del trabajo: réstale hablar de los que teniendo relacion con la propiedad de sus productos influyen en la suerte del cultivo, tanto mas poderosamente, cuanto dirijen el interés de sus agentes mas inmediatos.

224. Siendo los frutos de la tierra el producto inmediato del trabajo, y formando la única propiedad del colono, es visto cuan sagrada y cuan digna de proteccion debe ser á los ojos de la ley esta propiedad, que de una parte representa la subsistencia de la mayor y mas preciosa porcion de los individuos del Estado, y de otra la única recompensa de su sudor y sus fatigas. Ninguno la debe á la fortuna ni á la casualidad del nacimiento: todos la derivan inmediatamente de su ingenio y aplicacion, y siendo ademas muy incierta y precaria, porque pende en gran parte de las influencias del clima y de los tiempos, es sin duda que reuno en su favor cuantos títulos pueden hacerla recomendable á la justicia y humanidad del gobierno.

225. Ni es solo el colono el que interesa en la proteccion de esta propiedad, sino tambien el propietario; por que dividiéndose naturalmente sus productos entre el dueño y los cultivadores, es claro que representan á un mismo tiempo todo el fruto de la propiedad de la tierra y de la propiedad del trabajo, y que cualquiera ley que menoscabe la propiedad de estos productos ofenderá mas generalmente el interés individual, y será no solo injusta sino tambien esencialmente contraria al objeto de la Legislacion agraria.

226. Estas reflexiones bastan para calificar todas las leyes que de cualquiera

modo circunscriben la libre disposicion de los productos de la tierra: de las cuales hablará ahora la sociedad generalizando cuanto pueda sus raciocinios; por que sería muy difícil seguir la inmensa serie de leyes, ordenanzas y reglamentos que han ofendido y menguado esta libertad.

232. Es vano esperar la baratura de los precios de otro principio que de la abundancia, y es vano esperar esta abundancia sino de la libre contratacion de los frutos. Solo la esperanza del interés puede excitar al cultivador á multiplicarlos y traerlos al mercado. Solo la libertad alimentando esta esperanza, puede producir la concurrencia, y por su medio aquella equidad de precios, que es tan justamente deseada. Las tasas, las prohibiciones, y todas las demas precauciones reglamentarias, no pueden dejar de amortiguar aquella esperanza, y por lo mismo de desalentar el cultivo, y disminuir la concurrencia y la abundancia, y entonces por una reaccion infalible, la carestía nacerá de los mismos medios enderezados á evitarla.

235. Resulta de lo dicho, que la prohibicion de comprar fuera de puertas; la de vender sino á cierta hora, en ciertos puestos y bajo de ciertas formas, impuesta á los rebendedores... y otras providencias semejantes de que están llenos los reglamentos municipales, son tan contrarias como las tasas y posturas á la provision de sus mercados, pues que no entibian ménos la accion del interés individual, desterrando de ellos la concurrencia y la abundancia, y produciendo la carestía de los abastos.

236. Somejantes trabas se quieren co-honestar con el temor del monopolio, monstruo que la policia municipal ve siempre escondido tras de la libertad, pero no se reflexiona que si la libertad le provoca, tambien le refrena, porque excitando el interés general produce naturalmente la concurrencia, su mortal enemigo. No se reflexiona que aunque todos los agentes del trá-

fico aspiren á ser monopolistas, sucede por lo mismo, que queriendo serlo todos no lo puede ser ninguno, porque su competencia pone á los consumidores en estado de dar la ley en vez de recibirla. No se reflexiona, que solo cuando desaparece la concurrencia asustada por los reglamentos y vejaciones municipales, puede el monopolio usar sus ardidés, por que entonces la necesidad le hace sombra, los consumidores mismos le echan la capa y en semejante situacion la vigilancia y las precauciones de la policia no son capaces de quitarle la máscara ni de vencerle. Por último, no se reflexiona que si el monopolio es frecuente en los objetos de consumo, sujetos á posturas y prohibiciones, jamas lo es en los tráficos libres pues en ellos acredita la experiencia que los vendedores lejos de esconderse salen al paso al consumidor, lo buscan, lo llaman á grito ó se entran por sus puertas para convidarle y proveerle de cuanto necesita.»

Resulta de lo expuesto, que siendo el sistema de la libertad en el comercio de granos el mas favorable á los consumidores, y no teniendo otro objeto que el alivio y seguridad de estos, las modificaciones que le impone el decreto en cuestion, no sin gran razon se reclama en favor de la industria, la agricultura y el tráfico, una libertad que está fundada en los mas rigurosos principios de justicia.

Por estos motivos, los legisladores de cincuenta y siete no han puesto mas taxativa á la libertad de industria y trabajo, que la ofensa á los derechos de la sociedad; y para protegerla mas eficazmente no quisieron que hubiera prohibiciones, ni á título de proteccion. (Artículos 4 y 28 de la Constitucion federal.

Conteniendo prohibiciones de esta especie y medidas restrictivas de esa libertad, el decreto núm. 22 de la legislatura del Estado, el promotor fiscal pide: se sirva vd. declarar que la justicia de la Union ampara y protege á los expendedores de maiz de la plaza de esta ciudad contra las obliga-

ciones que les impone el mencionado decreto, con excepcion de las de pagar los derechos municipales que allí se previenen, arreglar sus medidas al ficlato y no vender semillas que perjudiquen á la salud pública.

Querétaro, Noviembre veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Luis Castañeda.*

#### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Querétaro, Diciembre siete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este recurso de amparo interpuesto por el C. Timoteo Fernandez de Jaúroguí en su nombre, y como apoderado de varios comerciantes en maiz de esta capital, á virtud de reputar violadas en sus personas las garantías que otorga la Constitucion federal en sus artículos 1 y 28 con la promulgacion del decreto núm. 22 del gobierno del Estado: el escrito de queja en el que se pide la inmediata suspension del acto reclamado: el informe respectivo de la autoridad: el pedimento fiscal, y auto en que por las razones y fundamentos en él expresos, se suspendieron los efectos del decreto mencionado: el informe que con arreglo al art. 99 de la ley de la materia evacuó la autoridad ejecutora del acto reclamado; el pedimento fiscal y por último lo alegado por las partes; con todo lo que ver-se debió. Considerando:

Primero; que el recurso interpuesto lo ha sido por crear los quejosos violados en sus personas, individualmente, algunas garantías concedidas en la carta fundamental de la República, en cuyo sentido lo admitió este juzgado: que si bien á fojas 20 consta que el C. gobernador al notificarselo el auto de suspension pronunciado por este juzgado, manifestó que la H. legislatura del Estado por haber pedido algunas aclaraciones el ayuntamiento de la capital, suspendió los efectos del decreto núm. 22, es-

ta suspension como se deduce de dicho oficio, es tan solo temporal, lo que no es bastante para sobreseer en este recurso, que requiere la abrogacion ó no existencia del acto origen del juicio.

Segundo; que el decreto núm. 22 en sus artículos 19, fraccion 3ª y 4ª del 6º; 31, 32, 33, 36 y 37, establece que la venta del maiz se ha de hacer en lugares fijos, reputando contrabando el que se venda fuera de dichos lugares; que las ventas sean bajo la inspeccion del administrador, y que dicho efecto al ser introducido en los lugares referidos ha de tener precio fijo, el que no podrá acrecerse y sí disminuirse, todo lo cual coharta la libertad de comercio y establece taxativas y restricciones, al derecho que á todo hombre garantiza la Constitucion Federal de poderse dedicar al trabajo ó industria que le parezca y aprovecharse de sus productos, sin mas limitacion que el ser útil y honesto el ejercicio á que se dedica.

Tercero; que dicha garantía solo podrá dejar de tener efecto en el caso de existir sentencia judicial cuando ataque derecho de tercero, ó gubernativamente en los términos que marque la ley cuando ofenda los derechos de la sociedad, lo que en el presente caso no ha sido justificado; que bajo el nombre de industria debemos entender segun el "Diccionario de legislacion del Dr. Juan Guin" la ocupacion del trabajo que se emplea en la *agricultura*, artes, fábricas y comercio.

Cuarto; que los artículos citados del decreto núm. 22 establecen un estanco de maiz, pues impiden el curso y venta libre de ese efecto, así mismo que entrañan una prohibicion, lo que se encuentra muy claro y distintamente vedado aun con el carácter de proteccion á la industria, por el art. 28 de la Constitucion, sin estar comprendido el presente caso entre las excepciones que él marca. Por las razones expuestas, de conformidad con el parecer fiscal y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la

Constitucion general y de los artículos 13, 27 y 28 de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo.

Primero; que la justicia de la Union ampara y protege al C. Timoteo Fernandez de Jáuregui y á los por él representados, contra el decreto núm. 22 promulgado por el gobierno del Estado.

Segundo; previa notificacion remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales, sacándose las copias respectivas. Lo decretó, mandó y firmó el C. juez de Distrito del Estado, Lic. Víctor de la Peña. Doy fé.—*V. de la Peña.*—Ante mí.—*Francisco Ruiz.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre diez y nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que ante el juez de distrito del Estado de Querétaro ha seguido el C. Timoteo Fernandez de Jáuregui, por sí y en nombre de varios comerciantes en maiz de la capital del mismo Estado, contra el decreto de la legislatura de éste, número 22 fecha 23 de Octubre próximo anterior que aprueba el reglamento que para establecer un mercado central de maiz, presentó el ayuntamiento de la propia capital en 31 de Octubre de 1870, en los términos que expresa; alegando los quejosos, que ese decreto monopoliza la venta del maiz al menudeo, porque no podrá hacerse sino en los cuatro puntos que designa por el administrador y subalternos que nombre el ayuntamiento, vigilándose para que no se haga en otros lugares y castigando con multa á los que se permitan verificarlo, cuyas disposiciones afirman los promoventes, que violan en sus personas las garantías que otorgan los artículos 4 y 29 de la Constitucion de la República.

Vistos los informes del gobernador de Querétaro, autoridad oponente del decre-



to reclamado, explicando que este no viola las garantías que señalan los quejosos invocando los artículos constitucionales referidos, porque no impide la venta del maíz ni establece monopolio ni estanco localizando solo la venta de aquel artículo y prescribiendo las medidas relativas necesarias al bien del público.

Vistos los pedimentos del promotor fiscal, sosteniendo que el decreto de que se trata, contiene prohibiciones y medidas restrictivas de la libertad de industria y de trabajo, y apoyando el amparo de los quejosos, con la excepcion de pagar los derechos municipales que allí se previenen, arreglar las medidas de la semilla al fielato y no vender las que fueren nocivas á la salubridad.

Visto el alegato producido por la parte de los que han intentado el presente juicio y todo lo demás que de autos consta y ver convino.

Considerando: 1º Que si bien la legislatura de Querétaro ha podido en el círculo de sus atribuciones establecer impuestos municipales, dictar providencias para que las medidas que se acostumbra en el comercio del maíz, estén arregladas y selladas por el fiel respectivo, y evitar que esa semilla en el tráfico pueda perjudicar á la salubridad pública, no puede, conforme al artículo 4º de la constitucion federal, poner trabas y taxativas al libre expendio de aquel artículo, imponiendo prohibiciones á una industria ó trabajo útil y honesto ni para que los que lo ejerzan se aprovechen de sus productos.

2º Que las disposiciones del decreto número 22 de la legislatura, que han reclamado los quejosos, establecen esas trabas y prohibiciones impidiéndoles vender maíz al menudeo con la amplia libertad que respecto del local, precio y modo favorece el artículo constitucional citado, siendo como es esa industria útil y honesta.

3º Que en esta virtud, el decreto en

cuestion con sus disposiciones reclamadas viola en las personas de los reclamantes la garantía que otorga el artículo 4º de la Constitucion que han invocado, y por tanto que están en el caso de que la justicia nacional los ampare. Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del juez de distrito del Estado de Querétaro, pronunciada en la capital del propio Estado, á siete del corriente mes, por la que declara, que la justicia de la Union ampara y protege al C. Timoteo F. de Jáuregui y á los por él representados, contra el decreto número 22 promulgado por el gobierno del Estado.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los C.C. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lafraqua.*—*Pedro Ordaz.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*J. Garcia Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, veinte de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.